

Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos y teniendo además presente:**

1º) Que los hechos denunciados por Gendarmería, ocurridos al interior del módulo F del Centro de Detención Preventiva de Angol y que consistieron en retenciones, agresiones y amenazas efectuadas contra funcionarios de Gendarmería por internos que se encontraban en dicho módulo, el día 7 de mayo de 2023, son graves;

2º) Que, el D.L. 2.858 establece en su artículo 3 letra a) que Gendarmería de Chile debe dirigir los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley, debiendo velar por la seguridad interior de ellos, lo que implica resguardar la integridad física y síquica tanto de sus funcionarios como de los internos que se encuentran en esos centros de privación de libertad;

3º) Que, también debe tenerse presente que a los pueblos originarios, entre los que se encuentra el pueblo mapuche, les asisten una serie de derechos que les reconocen los tratados internacionales sobre la materia respecto a las condiciones en que deben cumplirse las privaciones de libertad de sus miembros, que son reconocidos por la legislación interna, los que deben ser considerados al momento de decidir el establecimiento penal en que deben cumplir las detenciones, prisiones preventivas o penas, como también si es necesario disponer su traslado a otro centro penitenciario como medida de seguridad, como acontece en el presente caso;

4º) Que, además, respecto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, el artículo 150 del Código Procesal Penal y el artículo 6 N° 13 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establecen la obligación de Gendarmería de recabar la autorización del juez de garantía competente para



modificar el establecimiento donde se ordenó por el tribunal el cumplimiento de la medida cautelar, lo que no aconteció en este caso, pues la misma institución recurrida reconoce en su informe que la decisión de traslado del amparado fue comunicada en forma posterior a su ejecución, aludiendo en forma genérica a la gravedad de los hechos, sin especificar los fundamentos por los cuales en este caso preciso no podía esperar el pronunciamiento jurisdiccional;

5°) Que, cabe tener presente, que una vez que el Juez de Garantía tomó conocimiento de la medida de traslado del imputado, tampoco realizó acciones tendientes a revisar los fundamentos de la decisión adoptada y no otorgó la posibilidad que los intervinientes efectuaran alegaciones sobre la decisión adoptada por Gendarmería, especialmente de la defensa de aquél, para efectos de pronunciarse sobre si procedía la medida adoptada por la autoridad penitenciaria, pues, conforme al citado artículo 150 *“El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida”*, deber al que no dio cumplimiento;

6°) Que conforme a lo razonado, tanto Gendarmería como el Juzgado de Garantía, omitieron cumplir sus obligaciones. En efecto, respecto de la primera institución no recabó la autorización del tribunal competente para llevar a cabo el traslado del imputado, como el segundo omitió pronunciarse sobre la procedencia de tal medida, inactividad que lesiona la libertad personal y seguridad individual del amparado, a quien se le trasladó a un establecimiento penitenciario fuera de la región donde se conoce la causa en que se decretó la medida cautelar y que deberá ser subsanada por esta Corte acogiendo el recurso deducido en la forma que se indicará en lo resolutivo.



Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 21 Constitución Política de la República, **se confirma** la resolución apelada de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en el Ingreso Corte N° 135-2023, **con declaración** que el juez de garantía deberá fijar una audiencia a la brevedad, a fin de debatir sobre la procedencia del traslado del amparado Máximo Iván Queipul Huenchullan a otro establecimiento penitenciario fuera de la Región de La Araucanía, dispuesto por Gendarmería, conforme a los artículos 150 del Código Procesal Penal y 6 N° 13 del D.L. 2.859, debiendo pronunciarse específicamente si procede autorizar dicha medida.

**Se previene que el Ministro señor Brito**, fue de la opinión de confirmar la resolución apelada, sin compartir la declaración efectuada, teniendo además presente las siguientes consideraciones:

1°.- Que la Resolución Exenta N° 3175, de 7 de mayo de 2023, de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, ordena, el traslado del amparado Queipul Huenchullan al Centro Penitenciario de Bío Bío, fundándose en el Informe Técnico N° 40, de la misma fecha, que recomienda esa medida a un penal fuera de la región, en atención a que el imputado participó en las retenciones, agresiones y amenazas efectuadas en contra de funcionarios de Gendarmería el día señalado, que motivaron la denuncia respectiva por tales hechos al Ministerio Público, considerando que su permanencia en el recinto de Angol podría generar un evento crítico que afecte el normal funcionamiento del régimen interno del centro;

2°.- Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los imputados contemplada en el artículo 6 N° 13 de su Ley Orgánica fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de la



causa, previa autorización del juez competente, supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos;

**3°.-** Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado a su lugar de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues su ficha indica un domicilio en la comunidad de Temucuicui, sin que en la resolución administrativa en estudio se expresen los motivos que impiden el



traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región y que justifiquen el consiguiente desarraigo que el traslado conlleva;

**4°.-** Que, en este contexto, aparece que la medida de traslado carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal y, también, desproporcionada al ejecutarse considerando un traslado fuera de la región donde tiene su domicilio el imputado y su familia;

**5°.-** Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que “El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.” En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, y especialmente no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el



traslado de las familias del recurrente a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Comuníquese de inmediato por la vía más expedita, regístrese y devuélvase. Sin perjuicio, ofíciase.

Rol N° 146.944-2023

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:29

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:30

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 12/07/2023 10:37:45

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ  
MINISTRO(S)  
Fecha: 12/07/2023 10:43:30

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 12/07/2023 10:43:31



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos y teniendo además presente:**

1º) Que los hechos denunciados por Gendarmería, ocurridos al interior del módulo F del Centro de Detención Preventiva de Angol y que consistieron en retenciones, agresiones y amenazas efectuadas contra funcionarios de Gendarmería por internos que se encontraban en dicho módulo, el día 7 de mayo de 2023, son graves;

2º) Que, el D.L. 2.858 establece en su artículo 3 letra a) que Gendarmería de Chile debe dirigir los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley, debiendo velar por la seguridad interior de ellos, lo que implica resguardar la integridad física y síquica tanto de sus funcionarios como de los internos que se encuentran en esos centros de privación de libertad;

3º) Que, también debe tenerse presente que a los pueblos originarios, entre los que se encuentra el pueblo mapuche, les asisten una serie de derechos que les reconocen los tratados internacionales sobre la materia respecto a las condiciones en que deben cumplirse las privaciones de libertad de sus miembros, que son reconocidos por la legislación interna, los que deben ser considerados al momento de decidir el establecimiento penal en que deben cumplir las detenciones, prisiones preventivas o penas, como también si es necesario disponer su traslado a otro centro penitenciario como medida de seguridad, como acontece en el presente caso;

4º) Que, además, respecto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, el artículo 150 del Código Procesal Penal y el artículo 6 N° 13 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establecen la obligación de Gendarmería de recabar la autorización del juez de garantía competente para





modificar el establecimiento donde se ordenó por el tribunal el cumplimiento de la medida cautelar, lo que no aconteció en este caso, pues la misma institución recurrida reconoce en su informe que la decisión de traslado del amparado Fabián Llanca fue comunicada en forma posterior a su ejecución, aludiendo en forma genérica a la gravedad de los hechos, sin especificar los fundamentos por los cuales en este caso preciso no podía esperar el pronunciamiento jurisdiccional;

5º) Que, cabe tener presente, que una vez que el Juez de Garantía tomó conocimiento de la medida de traslado del imputado, tampoco realizó acciones tendientes a revisar los fundamentos de la decisión adoptada y no otorgó la posibilidad que los intervinientes efectuaran alegaciones sobre la decisión adoptada por Gendarmería, especialmente de la defensa de aquél, para efectos de pronunciarse sobre si procedía la medida adoptada por la autoridad penitenciaria, pues, conforme al citado artículo 150 *“El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida”*, deber al que no dio cumplimiento;

6º) Que conforme a lo razonado, tanto Gendarmería como el Juzgado de Garantía, omitieron cumplir sus obligaciones. En efecto, respecto de la primera institución no recabó la autorización del tribunal competente para llevar a cabo el traslado del imputado, como el segundo omitió pronunciarse sobre la procedencia de tal medida, inactividad que lesiona la libertad personal y seguridad individual del amparado, a quien se le trasladó a un establecimiento penitenciario fuera de la región donde se conoce la causa en que se decretó la



medida cautelar y que deberá ser subsanada por esta Corte acogiendo el recurso deducido en la forma que se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 21 Constitución Política de la República, **se confirma** la resolución apelada de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en el Ingreso Corte N° 132-2023, **con declaración** que el juez de garantía deberá fijar una audiencia a la brevedad, a fin de debatir sobre la procedencia del traslado del amparado Fabián Alejandro Llanca Nahuelpi a otro establecimiento penitenciario fuera de la Región de La Araucanía, dispuesto por Gendarmería, conforme a los artículos 150 del Código Procesal Penal y 6 N° 13 del D.L. 2.859, debiendo pronunciarse específicamente si procede autorizar dicha medida.

**Se previene que el Ministro señor Brito**, fue de la opinión de confirmar la resolución apelada, sin compartir la declaración efectuada, teniendo además presente las siguientes consideraciones:

1°.- Que la Resolución Exenta N° 3175, de 7 de mayo de 2023, de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, ordena, el traslado del amparado Llanca Nahuelpi al Centro Penitenciario de Rancagua, fundándose en el Informe Técnico N° 37, de la misma fecha, que recomienda esa medida a un penal fuera de la región, en atención a que el imputado participó en las retenciones, agresiones y amenazas efectuadas en contra de funcionarios de Gendarmería el día señalado, que motivaron la denuncia respectiva por tales hechos al Ministerio Público, considerando que su permanencia en el recinto de Angol podría generar un evento crítico que afecte el normal funcionamiento del régimen interno del centro;



**2°.-** Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los imputados contemplada en el artículo 6 N° 13 de su Ley Orgánica fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de la causa, previa autorización del juez competente, supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos;

**3°.-** Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado a su lugar de residencia y el de sus familiares que



pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues su ficha indica un domicilio en la comunidad de Temucuicui, sin que en la resolución administrativa en estudio se expresen los motivos que impiden el traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región y que justifiquen el consiguiente desarraigo que el traslado conlleva;

**4°.-** Que, en este contexto, aparece que la medida de traslado carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal y, también, desproporcionada al ejecutarse considerando un traslado fuera de la región donde tiene su domicilio el imputado y su familia;

**5°.-** Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que “El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.” En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, y especialmente



no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el traslado de las familias del recurrente a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Comuníquese de inmediato por la vía más expedita, regístrese y devuélvase. Sin perjuicio, ofíciase.

Rol N° 146.945-2023

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:32

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:33

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 12/07/2023 10:37:47

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ  
MINISTRO(S)  
Fecha: 12/07/2023 10:43:33

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 12/07/2023 10:43:34



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos y teniendo además presente:**

1º) Que los hechos denunciados por Gendarmería, ocurridos al interior del módulo F del Centro de Detención Preventiva de Angol y que consistieron en retenciones, agresiones y amenazas efectuadas contra funcionarios de Gendarmería por internos que se encontraban en dicho módulo, el día 7 de mayo de 2023, son graves;

2º) Que, el D.L. 2.858 establece en su artículo 3 letra a) que Gendarmería de Chile debe dirigir los establecimientos penales del país, aplicando las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley, debiendo velar por la seguridad interior de ellos, lo que implica resguardar la integridad física y síquica tanto de sus funcionarios como de los internos que se encuentran en esos centros de privación de libertad;

3º) Que, también debe tenerse presente que a los pueblos originarios, entre los que se encuentra el pueblo mapuche, les asisten una serie de derechos que les reconocen los tratados internacionales sobre la materia respecto a las condiciones en que deben cumplirse las privaciones de libertad de sus miembros, que son reconocidos por la legislación interna, los que deben ser considerados al momento de decidir el establecimiento penal en que deben cumplir las detenciones, prisiones preventivas o penas, como también si es necesario disponer su traslado a otro centro penitenciario como medida de seguridad, como acontece en el presente caso;

4º) Que, además, respecto de las personas que se encuentran en prisión preventiva, el artículo 150 del Código Procesal Penal y el artículo 6 N° 13 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, establecen la obligación de Gendarmería de recabar la autorización del juez de garantía competente para



modificar el establecimiento donde se ordenó por el tribunal el cumplimiento de la medida cautelar, lo que no aconteció en este caso, pues la misma institución recurrida reconoce en su informe que la decisión de traslado del amparado fue comunicada en forma posterior a su ejecución, aludiendo en forma genérica a la gravedad de los hechos, sin especificar los fundamentos por los cuales en este caso preciso no podía esperar el pronunciamiento jurisdiccional;

5°) Que, cabe tener presente, que una vez que el Juez de Garantía tomó conocimiento de la medida de traslado que afectaba al imputado, tampoco realizó acciones tendientes a revisar los fundamentos de la decisión adoptada y no otorgó la posibilidad que los intervinientes efectuaran alegaciones sobre la decisión adoptada por Gendarmería, especialmente de la defensa de aquél, para efectos de pronunciarse sobre si procedía la medida adoptada por la autoridad penitenciaria, pues, conforme al citado artículo 150 *“El tribunal será competente para supervisar la ejecución de la prisión preventiva que ordenare en las causas de que conociere. A él corresponderá conocer de las solicitudes y presentaciones realizadas con ocasión de la ejecución de la medida”*, deber al que no dio cumplimiento;

6°) Que conforme a lo razonado, tanto Gendarmería como el Juzgado de Garantía, omitieron cumplir sus obligaciones. En efecto, respecto de la primera institución no recabó la autorización del tribunal competente para llevar a cabo el traslado del imputado, como el segundo omitió pronunciarse sobre la procedencia de tal medida, inactividad que lesiona la libertad personal y seguridad individual del amparado, a quien se le trasladó a un establecimiento penitenciario fuera de la región donde se conoce la causa en que se decretó la medida cautelar y que deberá ser subsanada por esta Corte acogiendo el recurso deducido en la forma que se indicará en lo resolutivo.





Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 21 Constitución Política de la República, **se confirma** la resolución apelada de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco en el Ingreso Corte N° 131-2023, **con declaración** que el juez de garantía deberá fijar una audiencia a la brevedad, a fin de debatir sobre la procedencia del traslado del amparado Joaquín Wenulef Huenchullán Queipul a otro establecimiento penitenciario fuera de la Región de La Araucanía, dispuesto por Gendarmería, conforme a los artículos 150 del Código Procesal Penal y 6 N° 13 del D.L. 2.859, debiendo pronunciarse específicamente si procede autorizar dicha medida.

**Se previene que el Ministro señor Brito**, fue de la opinión de confirmar la resolución apelada, sin compartir la declaración efectuada, teniendo además presente las siguientes consideraciones:

**1°.-** Que la Resolución Exenta N° 3175, de 7 de mayo de 2023, de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, ordena, el traslado del amparado Huenchullán Queipul al Centro Penitenciario de Puerto Montt, fundándose en el Informe Técnico N° 41, de la misma fecha, que recomienda esa medida a un penal fuera de la región, en atención a que el imputado participó en las retenciones, agresiones y amenazas efectuadas en contra de funcionarios de Gendarmería el día señalado, que motivaron la denuncia respectiva por tales hechos al Ministerio Público, considerando que su permanencia en el recinto de Angol podría generar un evento crítico que afecte el normal funcionamiento del régimen interno del centro;

**2°.-** Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los imputados contemplada en el artículo 6 N° 13 de su Ley Orgánica fuera del territorio jurisdiccional del tribunal de la



causa, previa autorización del juez competente, supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos;

**3°.-** Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado a su lugar de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues su ficha indica un domicilio en la comunidad de Temucuicui, sin que en la resolución administrativa en estudio se expresen los motivos que impiden el



traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región y que justifiquen el consiguiente desarraigo que el traslado conlleva;

**4°.-** Que, en este contexto, aparece que la medida de traslado carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal y, también, desproporcionada al ejecutarse considerando un traslado fuera de la región donde tiene su domicilio el imputado y su familia;

**5°.-** Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que “El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.” En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, y especialmente no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el



traslado de las familias del recurrente a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Comuníquese de inmediato por la vía más expedita, regístrese y devuélvase. Sin perjuicio, ofíciase.

Rol N° 146.947-2023

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:35

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:36

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 12/07/2023 10:37:48

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ  
MINISTRO(S)  
Fecha: 12/07/2023 10:43:36

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 12/07/2023 10:43:37



SGXYXGSXCHJ

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos segundo a cuarto, que se eliminan.

**Y teniendo, además, presente:**

1°.- Que las Resoluciones Exentas números 3175 y 3176, ambas de 7 de mayo de 2023, de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, ordenan, la primera el traslado del amparado Llanca Quidel al Centro Penitenciario de Bío Bío, fundándose en el Informe Técnico N° 38, de la misma fecha, y la segunda el traslado del recurrente Queipul Millanao al Centro Penitenciario de Rancagua, en virtud de lo señalado en el Informe N° 39, también emitido el 7 de mayo pasado, los que recomiendan esa medida a un penal fuera de la región, en atención a que los condenados participaron en las retenciones, agresiones y amenazas, acciones efectuadas en contra de funcionarios de Gendarmería el día señalado, que motivaron la denuncia respectiva por tales hechos al Ministerio Público, considerando que la permanencia de ambos en el recinto de Angol podría generar un evento crítico que afecte el normal funcionamiento del régimen interno del centro;

2°.- Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad



para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos;

**3°.-** Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo de los condenados a sus lugares de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues sus fichas indican domicilios en la comunidad de Temucuicui, sin que en las resoluciones administrativas en estudio se expresen los motivos que impiden el traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región y que justifiquen el consiguiente desarraigo que los traslados conllevan;

**4°.-** Que, en este contexto, aparece que las medidas de traslados carecen de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquellas sean ilegales y, también, desproporcionadas al ejecutarse considerando un traslado fuera de la región donde tienen sus domicilios, alejándose de lo dispuesto en el



artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece que “En resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer reclusos preferentemente cerca de su lugar habitual de residencia”, frustrando toda posibilidad de resocialización y apoyo familiar;

5°.- Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que “El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.” En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación de los amparados a sus núcleos familiares y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica de los amparados, de otros internos, y especialmente no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el traslado de las familias de los recurrentes a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo prevenido en el artículo 21 de





la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el Ingreso Corte N° 133-2023 y, en su lugar, se declara que **se acoge** el recurso de amparo interpuesto a favor de Juan Patricio Queipul Millanao y Hanthu Lementhu Llanca Quidel, disponiéndose el traslado a un recinto penitenciario de la Región de La Araucanía.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 146.948-2023

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:38

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:38

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 12/07/2023 10:37:50

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ  
MINISTRO(S)  
Fecha: 12/07/2023 10:43:39

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 12/07/2023 10:43:40



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

**Vistos:**

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de sus considerandos segundo a cuarto, que se eliminan.

**Y teniendo, además, presente:**

1°.- Que la Resolución Exenta N° 3176, de 7 de mayo de 2023, de la Subdirección Operativa de Gendarmería de Chile, ordena, el traslado del amparado Marileo Marileo al Centro Penitenciario de Puerto Montt, fundándose en el Informe Técnico N° 42, de la misma fecha, que recomienda esa medida a un penal fuera de la región, en atención a que el condenado participó en las retenciones, agresiones y amenazas, acciones efectuadas en contra de funcionarios de Gendarmería el día señalado, que motivaron la denuncia respectiva por tales hechos al Ministerio Público, considerando que su permanencia en el recinto de Angol podría generar un evento crítico que afecte el normal funcionamiento del régimen interno del centro;

2°.- Que la facultad de la autoridad administrativa de Gendarmería de Chile para disponer el traslado de los condenados contemplada en el artículo 6 N° 12 de su Ley Orgánica y en el artículo 28 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios supone una ponderación de las circunstancias de hecho que conducen al ejercicio de esa prerrogativa, evaluación que pertenece a la motivación del acto administrativo, cuya ausencia contravendrá el principio de razonabilidad y devendrá por ello en ilegal. Tales atribuciones conforman una herramienta de la autoridad que se caracteriza por otorgar un margen de libertad para decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás puede invocarse para encubrir una actuación que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna persona, pues por aplicación del artículo 6° de la



Constitución Política de la República, la autoridad está obligada a respetar todas las normas del texto constitucional, entre las que se incluye el derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y al debido proceso.

La Constitución Política, en su artículo 19 N° 26, dispone que sólo una habilitación expresa de la ley puede autorizar una afectación en el ejercicio de derechos fundamentales y en tal caso, los hechos y fundamentos de derecho del acto de la autoridad que los limite, restrinja, prive, perturbe o amenace "deberán siempre expresarse", de acuerdo a lo que dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos;

**3°.-** Que, asimismo, Gendarmería debe orientar su labor a la resocialización de los internos que tiene a su cuidado, lo que importa, en la medida de lo posible, llevar a cabo la privación de libertad respetando el arraigo del condenado a su lugar de residencia y el de sus familiares que pudieran contribuir a dicho fin, aspecto que en este caso debió ser sopesado, pues su ficha indica un domicilio en la comunidad de Temucuicui, sin que en la resolución administrativa en estudio se expresen los motivos que impiden el traslado a un recinto penitenciario que se emplace en la misma región y que justifiquen el consiguiente desarraigo que el traslado conlleva;

**4°.-** Que, en este contexto, aparece que la medida de traslado carece de motivos suficientes que la justifiquen, deficiencia que hace que aquélla sea ilegal y, también, desproporcionada al ejecutarse considerando un traslado fuera de la región donde tiene su domicilio el condenado y su familia, alejándose de lo dispuesto en el artículo 53 inciso segundo del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios que establece que "En resguardo del derecho a visitas, los condenados deberán permanecer reclusos preferentemente cerca de su lugar



habitual de residencia”, frustrando toda posibilidad de resocialización y apoyo familiar;

5°.- Que, finalmente, Gendarmería no dio cumplimiento a lo que dispone el artículo 25 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, en cuanto dispone que “El régimen de los detenidos, sujetos a prisión preventiva y penados se sujetará a lo establecido en la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y vigentes, la ley procesal pertinente, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y otras leyes y reglamentos relacionados con materias penitenciarias, y las normas del presente reglamento.” En la especie, la medida impugnada evidentemente no se ajusta no solo a las disposiciones constitucionales, sino que además se aparta de tratados internacionales sobre derechos humanos. En particular, atenta contra la vinculación del amparado a su núcleo familiar y de la relación con sus cercanos, trasgrediendo con ello el inciso segundo del artículo 1° de la Carta Fundamental, en cuanto se reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, su protección y fortalecimiento. Tales derechos se pueden ver conculcados en la especie, toda vez que de una parte no se ha justificado que el traslado dispuesto sea necesario para garantizar la vida e integridad física o psíquica del amparado, de otros internos, y especialmente no se señala razones que justifiquen que dicha medida se realice a un recinto penitenciario fuera de la región; y de otra, porque se dificulta notablemente el traslado de las familias del recurrente a un recinto penitenciario localizado en otra región del país.

Por estas consideraciones y de acuerdo a lo prevenido en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, **se revoca** la sentencia apelada de veinte de junio de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, en el Ingreso Corte N° 134-2023 y, en su lugar, se declara que **se acoge** el recurso



de amparo interpuesto a favor de Freddy Jonathan Marileo Marileo,  
disponiéndose el traslado a un recinto penitenciario de la Región de La  
Araucanía.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 146.949-2023

HAROLDO OSVALDO BRITO CRUZ  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:41

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN  
MINISTRO  
Fecha: 12/07/2023 10:43:41

MARIA CRISTINA GAJARDO HARBOE  
MINISTRA  
Fecha: 12/07/2023 10:37:52

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ  
MINISTRO(S)  
Fecha: 12/07/2023 10:43:42

DIEGO ANTONIO MUNITA LUCO  
ABOGADO INTEGRANTE  
Fecha: 12/07/2023 10:43:42



QXGPXGHPLHJ

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Jorge Dahm O., Maria Gajardo H., Ministra Suplente Eliana Victoria Quezada M. y Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, doce de julio de dos mil veintitrés.

En Santiago, a doce de julio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

